

VIDA NACIONAL

LUCHA POR LA JUSTICIA EN MERIDA

A raíz del asesinato del estudiante de la ULA, Luis Carvallo, de manos de uno de esos tantos "brabucones apoyados" (por partidos, conocidos o dinero) que abundan en el país, la ciudad de Mérida se vio paralizada por cinco días, producto de las manifestaciones por la vida y la justicia que la muerte del estudiante despertó en la población.

Las revueltas alcanzaron tal magnitud que la ciudad tuvo que ser tomada por la guardia nacional y el ejército. Tropas de cazadores e infantería de marina fueron trasladadas a la ciudad con el fin de (reprimir) mantener el orden, dada la proporción de los acontecimientos.

Sin duda, el calibre de los hechos no puede ser sólo explicado por el asesinato del Br. Carvallo; otros elementos no menos injustos para la población han tenido también su expresión en las revueltas merideñas.

La desconfianza no gratuita que siente el país de su sistema judicial, ha obligado a que la gente salte a la calle a pedir justicia, no vaya a ser que nuevamente un crimen quede impune. Más aún cuando el abogado Bernardino Navas, su padre y hermano, llevan unas cuantas víctimas "en su haber" sin que por ello hayan recibido castigo.

Pero a este grito de justicia se le ha unido otro, y es el de miles de venezolanos que sienten la injusticia del sistema político y económico de nuestro país todos los días. El desempleo, la miseria y la desatención son otras formas de injusticia que se han expresado en Mérida de la misma forma como ocurre en otros países latinoamericanos donde la desesperación por la carencia revasa el "aguante" y se transforma en violencia por la vida.

El gobierno, en un intento más por mostrarnos un país ficticio construido a base de propagandas, ha tratado de deslegitimar estas manifestaciones y justificar la represión acusando (como siempre) a vándalos, infiltrados, indocumentados y narcotraficantes como los responsables de estos hechos.

Aquí lo que está operando es la peligrosa máxima: "Quien no está conmigo, está contra mí". Así todos aquellos descontentos que protesten en favor de una vida más justa, serán inmediate-

te calificados como subversivos ligados al narcotráfico y agentes de un complot contra el Estado y el sistema democrático.

La verdadera interpretación de los hechos parece ajustarse más a lo dicho por uno de los dirigentes estudiantiles de la ULA: "Vándalos son los que han saqueado la administración pública, los jueces y fiscales corruptos que no aplican justicia; infiltrados son los 400 guardias nacionales que atropellan a la población" (El Universal, Miércoles, 15/3/87)

A los sucesos en Mérida han seguido otros en Barquisimeto, Maracay, Trujillo y Caracas. Todos ellos provocados por la suspensión, a última hora, de una marcha de solidaridad con los estudiantes merideños que se había programado para el día jueves 19 de marzo.

El gobierno, haciendo gala de su torpeza y su inconfesada disposición a reprimir brutalmente cualquier manifestación de descontento democrático, lanzó a la calle a los destacamentos de la Guardia Nacional y los grupos antimotines de la Policía Metropolitana para que arremetiera contra los estudiantés, aun sin haberse iniciado la marcha, lo cual desató fuertes enfrentamientos entre estudiantes y policías, en la UCV y el Pedagógico de Caracas, así como masivas detenciones en Barquisimeto y Maracay de estudiantes que se trasladaban a participar en la marcha.

Tal y como lo han expresado el rector de la UCV y el director del Pedagógico, los actos de violencia fueron el resultado de la provocación que ejercieron los cuerpos de seguridad al apostarse de una manera amenazante a las puertas de estas casas de estudios y la intransigencia hacia el diálogo mostrada por los jefes de estos cuerpos.

La hipersensibilidad que nuevamente ha demostrado el gobierno de Lusinchi se debe a que la explosión social vivida en Mérida es sólo una muestra de lo que puede ocurrir en otras regiones del país, de continuarse con una política social y económica que no atiende a los sectores populares, quienes progresivamente se han proletariado aún más en estos años de crisis.

Por otra parte se hace indispensable que la población pueda volver a confiar en ciertas instituciones fundamentales para la democracia, como por ejemplo el poder judicial. El saneamiento de las instituciones democráticas, en las que median intereses políticos y económicos determinados y excluyentes de la mayoría, es indispensable para que no se cometan atropellos contra la vida de una persona en particular y grupos sociales en general.

En conclusión, los hechos de Mérida son prueba del deterioro del país; la evidencia más tajante de esto son las absurdas hipótesis que desde la Presidencia se han emitido. Queda el asesinato del estudiante como el detonante de una situación de desesperanza y de la falta de fe de la población en sus instituciones. Por más que el gobierno se empeñe en afirmar lo contrario, "no se puede tapar el sol con un dedo".

